



Departamento Nacional de Planeación  
República de Colombia

Libertad y Orden

**Prosperidad  
para todos**

PRAP-CP - 20118010574661

Bogotá D.C., Miércoles, 12 de Octubre de 2011

Doctor  
Carlos Felipe Santacruz  
Calle 77 No. 13-47 Of. 402  
Bogotá - D. C

Referencia: Consulta relacionada con la inhabilidad establecida en el art. 90° de la Ley 1474 de 2011. Radicación Orfeo: 20116630334122

Apreciado Doctor:

Me refiero a su comunicación en la que pregunta sobre la temporalidad de la inhabilidad establecida en el artículo 90° de la Ley 1474 de 2011 denominada Estatuto Anticorrupción y sobre el responsable de hacerla explícita en el Registro Único de Proponentes, de manera atenta le informamos lo siguiente:

Como punto inicial, cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación según las funciones atribuidas por el Decreto 3517 de 2009 y los documentos Conpes 3248 y 3249 de 2003, tiene limitada su competencia en materia de Contratación Pública a la orientación y el seguimiento del proceso de implementación de la estrategia transversal de reforma a la contratación pública; la cual tiene como eje la formulación de una Política Pública en la materia, que se base en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos.

En vista de lo anterior, éste Departamento NO es competente para pronunciarse sobre aspectos particulares y concretos en la presente respuesta. No obstante lo anterior, podemos informarle lo siguiente:

#### **1. Inhabilidades e Incompatibilidades en la contratación pública**

De forma general, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la Contratación Pública, se encuentra en normas Constitucionales y Legales.

Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. La



consagración de las inhabilidades e incompatibilidades obedecen unas, primordialmente a razones éticas, y otras se vinculan con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa, pues, se busca asegurar una adecuada selección del contratista, que redunde en beneficio de los fines de interés público o social insitos en la contratación.<sup>1</sup>

Tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado:

*"Las inhabilidades son impedimentos para ejercer una función determinada o para que una persona sea elegida o designada para desempeñar un cargo público, en razón de intereses personales o por la ausencia de calidades para el ejercicio del cargo; la inhabilidad puede generar la nulidad de la elección o nombramiento. Por su parte, las incompatibilidades son prohibiciones para realizar actividades o gestiones de manera simultánea con el ejercicio de un cargo; la violación del régimen de incompatibilidades puede dar lugar a sanción disciplinaria, o a la pérdida de investidura para los congresistas.*

*"Las causales de inhabilidad e incompatibilidad deben estar expresa y taxativamente establecidas en la Constitución o en la ley y son de aplicación e interpretación restrictivas. Este principio tiene su fundamento en el artículo 60. de la Carta, según el cual los servidores públicos no pueden hacer sino aquello que les está expresamente atribuido por el ordenamiento jurídico; los particulares pueden realizar todo lo que no les esté prohibido.*

*"En el ámbito contractual, las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias que imposibilitan para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. También impiden la participación en el proceso de selección y el ejercicio de los derechos surgidos del mismo, cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene para un proponente dentro de una licitación o concurso.*

*"Las inhabilidades e incompatibilidades son de creación legal y de interpretación restrictiva, por lo tanto, cada situación debe estar ceñida estrictamente a la hipótesis taxativamente prevista por el legislador y su alcance no puede desbordarla."<sup>2</sup> (Negritas y subrayas fuera de texto)*

## 2. Inhabilidad por incumplimiento reiterado

Sobre lo consultado, el artículo 90° de la Ley 1474 de 2011 prevé lo siguiente:

**"ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO.**

**Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:**

- a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.
- b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
- c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

<sup>1</sup> Sentencia C-489 de 1996 Corte Constitucional

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO, sala de consulta y servicio civil, Consejero Ponente : Augusto Trejos Jaramillo, concepto del 29 de abril de 1998, Radicación número: 1097



Libertad y Orden

Departamento Nacional de Planeación  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

**La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.**

*Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria." (Subrayas y negritas fuera de texto)*

Bajo el tenor de lo dispuesto en el artículo transcrito, el Estatuto es especialmente cuidadoso en castigar a aquellos contratistas que reiteradamente le incumplan al Estado a futuro, habida cuenta el uso de la expresión "quedará" que en el tiempo verbal utilizado indica que no cobija situaciones ya consolidadas. Por eso se ha dispuesto que quedará inhabilitado por un término de 3 años el contratista que sea objeto de imposición de 5 o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos en una misma vigencia fiscal; o que sea objeto de 2 declaratorias de incumplimiento en un mismo año; o que reciba al menos 2 multas y un incumplimiento en el mismo año con una o varias entidades estatales<sup>3</sup>.

De esta manera, la inhabilidad cobija a quienes **incurren** en tales circunstancias de incumplimiento que desemboquen en una multa o en una declaratoria de incumplimiento ejecutoriada y publicada en el Registro Único de Proponentes (RUP) **a partir del 12 de julio de 2011**, la cual se hará explícita en dicho certificado.

### **3. Retroactividad y retrospectividad de la Ley e inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Estatuto Anticorrupción**

Respecto de su espacio-tiempo de aplicabilidad de la Ley 1474 de 2011, el artículo 135 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que ésta **aplicaría a partir de su expedición**, vale decir, hacia futuro, lo que implica que no se puedan dar situaciones de **retroactividad**. Lo anterior no desconoce que se pueda dar el fenómeno de la **retrospectividad** de la Ley y que en virtud de ésta se puedan generar regulaciones a situaciones no consolidadas con anterioridad a la expedición de la Ley.

Al respecto, es oportuno mencionar el desarrollo que sobre conflicto de leyes en el tiempo hace la Academia de Jurisprudencia Colombiana en los siguientes términos:

*"I. Conflicto de leyes en el tiempo y el principio de Irretroactividad.*

*En primer lugar, se presenta un conflicto de leyes en el tiempo cuando surge la necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto que nació bajo la ley antigua, pero cuyos efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. El conflicto se centra en determinar si a ese hecho en concreto, se le aplicará lo establecido en la ley nueva, o por el contrario, lo señalado en la ley anterior. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado por completo bajo una ley antigua, no existe un conflicto de leyes, como*

<sup>3</sup><http://www.mii.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA%20ESTATUTO%20DE%20ANTICORRUPCI%C3%93N73.PDF> pág. 9

**tampoco lo habrá cuando los hechos y situaciones que deben ser regulados se presentan en su integridad durante la vigencia de la nueva ley.**

La fórmula general que permite solucionar un conflicto de leyes en el tiempo, es la **irretroactividad de la ley**, según la cual **la ley nueva rige para todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia**. Tal posición garantiza que se respeten los derechos, hechos y relaciones jurídicas formados de manera válida bajo el imperio de una ley anterior. Esta prohibición de retroactividad encuentra su razón de ser en el mantenimiento del orden público, pues otorgar, como regla general, efectos retroactivos a las leyes nuevas, significaría destruir la confianza y la seguridad que se tiene en las normas jurídicas por parte del conglomerado social al cual se le aplican tales reglas<sup>4</sup>. Se puede inferir, entonces, que en el derecho colombiano, la regla general es que cuando se promulga una nueva ley, la misma tenga una vocación de vigencia hacia el futuro<sup>5</sup>.

Ahora bien, de manera excepcional, se han planteado algunas situaciones de **ultractividad o de retroactividad de la ley**. En virtud de la primera, una ley derogada continúa regulando situaciones nacidas bajo su imperio; en cambio, por el fenómeno de la retroactividad puede tener aplicación una norma sobre situaciones acaecidas bajo el amparo de una ley anterior, tal y como ocurre con las leyes que favorecen a los reos penales, o con aquellas que comprometen el interés público o social.

O también, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que por mandato legal se respete lo surtido bajo la ley antigua, caso en el cual hablamos de **retrospectividad** de la ley<sup>6</sup>.<sup>7</sup> (Negritas y subrayas fuera de texto)

Como se desprende de lo anterior, si una situación estaba consolidada antes de la expedición de la Ley, que para nuestro estudio referimos a la Ley 1474 de 2011, es decir, antes del 12 de julio de 2011, la nueva incompatibilidad que se creó en el artículo 90° referido no puede contabilizar, a efectos de su aplicación, multas e incumplimientos impuestos antes de esa fecha, así el reporte a las Cámaras de Comercio a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 sobre reporte de multas y sanciones se haya realizado con posterioridad al 12 de julio, pues al momento de la imposición de la sanción respectiva por parte de la entidad respectiva no gobernaba la regulación del Estatuto Anticorrupción, motivo por el cual, las **multas y sanciones impuestas con anterioridad al 12 de julio de 2011 NO contabilizan para estos efectos**.

Ahora bien, sobre el alcance de la inhabilidad e incompatibilidad sobrevinientes, el Consejo de Estado indicó:

**"1.3. Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.**

<sup>4</sup> "A pesar de todo, el principio de la no retroactividad de las leyes no deja de imponerse con la fuerza de una perogrullada, poniendo a la omnipotencia de la ley un límite derivado de la naturaleza misma de las cosas. En efecto si se permite a la ley llegar a trabucar todo un pasado jurídico, regularmente establecido, la ley no toma ya sino la catadura de un instrumento de opresión y de anarquía." Cfr. JULIEN BONECASSE, *Introducción al estudio del derecho*, Ediciones Librería Siglo XX, Bogotá, 1945, p.145.

<sup>5</sup> Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-402 del 10 de agosto de 1998. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz

<sup>6</sup> Artículo 17 de la ley 153 de 1887: "Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las cercene o las anule."

<sup>7</sup> Academia Colombiana de Jurisprudencia, Ernesto Rengifo García Académico correspondiente, Concepto del 27 de junio de 2005, ER-86-06Tmado de [http://www.acj.org.co/conceptos/concep\\_ord\\_009-2005.htm](http://www.acj.org.co/conceptos/concep_ord_009-2005.htm)





*"Una circunstancia de inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente en materia contractual es aquella que se presenta con posterioridad a la celebración del contrato y ocasiona que, a partir de ese momento, el contratista no pueda seguir ejecutándolo.*

*"El artículo 9o. del estatuto contractual prescribe que si llega a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, de no ser ello posible, renunciará a su ejecución. Igualmente determina que cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.*

*"Trata así de evitarse que el contratista, dada su condición, continúe vinculado contractualmente con el Estado, o que el aspirante a serlo siga tomando parte, en abierta contradicción con el artículo 13 constitucional que estatuye el principio de igualdad, en los procesos de selección y adjudicación, lo cual implicaría la ruptura del necesario equilibrio que debe observarse frente a los demás contratantes, concursantes o licitantes."*<sup>8</sup>

De la misma manera, el artículo 96 de la Ley 1474 de 2011 reguló lo pertinente en los siguientes términos:

*"RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los procesos de contratación estatal en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación.*

*"No se generarán inhabilidades ni incompatibilidades sobrevinientes por la aplicación de las normas contempladas en la presente ley respecto de los procesos contractuales que se encuentren en curso antes de su vigencia."*

En vista de lo anterior, la misma Ley 1474 dispuso por otra parte y de manera adicional a lo señalado sobre la retroactividad o retrospectividad en el presente concepto, que si al momento de expedición de la Ley se encontraban procesos contractuales en curso, no sobrevendrían situaciones de inhabilidad o incompatibilidad creados en esa Ley como la que es objeto de examen en el presente escrito, motivo por el cual, era clara la voluntad del legislador de regular situaciones que se consoliden a futuro.

#### **4. Reporte de multas e incumplimientos al RUP**

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 dispone que "Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato, tendrán la **dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)**"

En complemento de lo anterior, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone que:

*"ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.*

*En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus*

---

<sup>8</sup> CONSEJO DE ESTADO, sala de consulta y servicio civil, Consejero Ponente : Augusto Trejos Jaramillo, concepto del 29 de abril de 1998, Radicación número: 1097



Libertad y Orden

Departamento Nacional de Planeación  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

**obligaciones.** Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

*Parágrafo.* La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

*Parágrafo transitorio.* Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas." (subrayas y negritas fuera de texto)

Se desprende de lo anterior, que las entidades estatales, en desarrollo de su función de vigilancia y control ahora reforzado por la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), para lograr el cumplimiento del contrato, pueden imponer multas y declarar incumplimientos de las obligaciones contractuales **a través de acto administrativo que declare dicho incumplimiento o imponga la multa respectiva, lo cual constituye declaratoria de siniestro de incumplimiento, las cuales deben ser reportadas al RUP.** Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades dispongan de mecanismos adicionales de administración de su contrato que de manera previa a la imposición de una multa o declaratoria de incumplimiento conminen al contratista a cumplir el objeto del contrato, v.gr., descuentos por incumplimientos de niveles de servicio los cuales, bajo la reglamentación vigente, no son reportados al RUP y no generan inhabilidad alguna<sup>9</sup>.

Al respecto del reporte de multas, sanciones e incumplimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 14 del Decreto 1464 de 2010, las entidades estatales deben reportar la información sobre multas y sanciones, mensualmente a las Cámaras de Comercio de la jurisdicción del domicilio del contratista, la cual se mantendrá en el registro hasta por cinco (5) años contados a partir de su reporte. Así lo dispone la norma en mención:

**"Artículo 14. Información proveniente de entidades estatales**

*Las entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos a la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el quince de cada mes, la siguiente información que le corresponda a aquel, sobre contratos que le hayan sido adjudicados, o tenga en ejecución y ejecutados, multas y sanciones en firme:*

- a. Código de la cámara de comercio;
- b. Fecha de reporte;
- c. NIT;
- d. Nombre de la entidad oficial;
- e. Código de la ciudad o municipio;
- f. Dirección de la entidad oficial que reporta la información;
- g. Nombre del funcionario;
- h. Cargo del funcionario que reporta la información;
- i. Número de inscripción del proponente;

<sup>9</sup> Sin embargo y de acuerdo a la regulación contractual respectiva, un porcentaje determinado de los mismos podría devenir en incumplimiento.



- j. Número de identificación del proponente;
- k. Nombre del proponente;
- l. Número de contrato;
- m. Fecha de adjudicación del contrato
- n. Fecha de iniciación del contrato;
- o. Fecha de terminación del contrato;
- p. Clasificación del contrato;
- q. Indicador de cumplimiento;
- r. Cuantía del contrato;
- s. Valor de la multa;
- t. Descripción de la sanción;
- u. Identificación del acto administrativo que impone la sanción o la multa; y
- v. Fecha del acto administrativo que impone la sanción, multa o cláusula penal pecuniaria.

Dentro de la información que las entidades estatales deben suministrar a la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, está la concerniente con las multas pagadas y las sanciones cumplidas o revocadas. La certificación de esta información sólo podrá ser modificada por orden de la entidad estatal que haya suministrado la información o por providencia ejecutoriada de autoridad judicial competente. En todo caso, la información sobre multas y sanciones se mantendrá en el registro hasta por cinco (5) años contados a partir de su reporte. En consecuencia, una vez reportado el acto administrativo mediante el cual se impuso multa o sanción al inscrito, y habiendo cumplido cinco (5) años desde la fecha en que se registró en la cámara de comercio, ésta lo debe eliminar del certificado automáticamente.

El servidor público encargado de remitir la información que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007.

La información reportada por las entidades del Estado sobre multas o sanciones impuestas a los proponentes inscritos en el RUP, así como multas pagadas y las sanciones cumplidas o revocadas deberá también ser publicada mensualmente en la página del Registro Único Empresarial – RUE y en la del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y deberá ser accesible a todas las personas o entidades interesadas en consultarla.

**Parágrafo 1.** La Superintendencia de Industria y Comercio determinará a través de circular, las especificaciones técnicas para el reporte electrónico de información que las entidades estatales están obligadas a suministrar a las cámaras de comercio sobre contratos en ejecución, multas y sanciones de los inscritos.

**Parágrafo 2.** La información remitida por las entidades estatales en virtud del presente artículo, no será verificada por las cámaras de comercio. Por lo tanto las controversias respecto de la información remitida por las entidades estatales, deberán surtirse ante la entidad estatal correspondiente y no podrán debatirse ante las cámaras de comercio.

Las cámaras no certificarán la información remitida por las entidades estatales relativa a los contratos adjudicados y ejecutados; la cual tampoco será tenida en cuenta como documentos sujetos a verificación documental.

**Parágrafo 3.** Para la remisión de la información a la cámara de comercio que corresponda, las entidades estatales deberán verificar en el Registro Único Empresarial el número de inscripción y la cámara de comercio competente por jurisdicción que corresponda al contratista sobre el cual reportan información.

**Parágrafo 4.** A más tardar el 31 de mayo de 2010, las entidades públicas informarán a las cámaras de comercio, de acuerdo con la instrucción que reciban de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre multas y sanciones impuestas a contratistas que no estaban obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes antes del 16 de enero de 2009. La Entidad Estatal realizará el reporte a las cámaras de comercio que tengan jurisdicción en el lugar



del domicilio del inscrito. Se deberá reportar la información de los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.

**Parágrafo transitorio.** Las Entidades Estatales deberán reportar la información de que trata el inciso primero del presente artículo, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero del 2009 al 30 de abril de 2010 a más tardar el 31 de mayo de 2010. **A partir de esta fecha se reportará mensualmente la información correspondiente al mes inmediatamente anterior en los términos previstos en el presente decreto.**

*En todo caso las Cámaras de Comercio registrarán la información que sea remitida con posterioridad a las fechas establecidas en este artículo.* (subrayas y negritas fuera de texto)

El reporte de las multas e incumplimientos es un deber a cargo de las entidades estatales so pena de estar incursas en una causal de mala conducta disciplinable, habida cuenta que dicha información, a pesar de que no es verificada por las cámaras de comercio, la misma es publicada en RUP a efectos de que toda la administración pública conozca sobre el nivel de cumplimiento del contratista respectivo y más aún ahora con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 que creó la inhabilidad por incumplimientos reiterados.

En vista de lo anterior, dispone la norma transcrita, que *"las controversias respecto de la información remitida por las entidades estatales, **deberán surtirse ante la entidad estatal correspondiente y no podrán debatirse ante las cámaras de comercio**"*.

En efecto, la certificación de la información sobre multas y sanciones sólo podrá ser modificada en los siguientes casos, a saber:

1. **Por orden de la entidad estatal que haya suministrado la información o**
2. **Por providencia ejecutoriada de autoridad judicial competente.**

No obstante lo anterior, una vez reportado el acto administrativo mediante el cual se impuso multa, sanción o incumplimiento al inscrito, y habiendo cumplido cinco (5) años desde la fecha en que se registró en la cámara de comercio, ésta lo debe eliminar del certificado automáticamente.

Por el contrario, durante los 5 años en que permanece esa información en el registro, son las Cámaras de Comercio las responsables de hacer explícita la inhabilidad en razón precisamente de su función de administrar el RUP sin que ello implique la verificación por parte de las Cámaras la información reportada por las entidades a este respecto, cuando se dé una de las siguientes condiciones establecidas en la Ley:

- a. Haber publicado la imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con base en información reportada por una o varias entidades estatales respecto del inscrito correspondiente.





- b. Haber publicado declaratorias de incumplimiento contractual de por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con base en información reportada por una o varias entidades estatales respecto del inscrito correspondiente.
- c. Haber publicado la imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con base en información reportada por una o varias entidades estatales respecto del inscrito correspondiente.

En el texto del Certificado **se hará explícita ésta inhabilidad por un término de tres (3) años**, contados a partir de la inscripción de la última **multa o incumplimiento** publicado en el Registro Único de Proponentes, el cual, una vez vencido, deberá eliminarse del RUP, para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio deberá proceder a ajustar el formato del certificado conforme lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 14 del Decreto 1464 de 2010 y la obligación para el RUP que impone la norma.

## 5. Conclusión

En vista de todo lo anterior, es posible concluir que al momento de la expedición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, si un contratista hubiere sido sancionado con multa o declaratoria de incumplimiento, no le aplicará la inhabilidad creada en el artículo 90° de la Ley 1474 de 2011. De la misma manera, las multas e incumplimientos impuestos con anterioridad al 12 de julio de 2011 NO contabilizan a efectos de la inhabilidad referida en el presente escrito para la vigencia 2011.

Teniendo en cuenta que las Cámaras de Comercio son las encargadas de la publicación de las multas e incumplimientos reportados por las entidades estatales, son responsables de hacer explícito en el certificado del RUP la inhabilidad por incumplimientos reiterados una vez se haya publicado la última multa o incumplimiento en la misma vigencia fiscal en los términos antes indicados en este concepto.

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 230 de la Constitución Política y la Ley 153 de 1887, los conceptos son criterios auxiliares de interpretación y no vinculan ni comprometen al Departamento Nacional de Planeación, motivo por el cual, las apreciaciones de la presente respuesta solamente sirven para dar una ilustración de carácter general para que el peticionario, conforme a lo expuesto, asuma su propia posición conforme al grado de análisis y convencimiento adquirido.

Atentamente,

  
**SONIA ASTRID AMAYA VEGA**

Directora

Programa de Renovación de la Administración Pública

